



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/1995/17/Add.1
13 de junio de 1995

ESPAÑOL
Original: ESPAÑOL/FRANCES/
INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías
47º período de sesiones
Tema 10 del programa provisional

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS DETENIDOS

Informe del Secretario General preparado en cumplimiento de
la resolución 1994/33 de la Subcomisión

Adición

El presente documento contiene información presentada por los Gobiernos de Namibia y Perú, así como por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Comité Internacional de la Cruz Roja, recibida después de la preparación del documento E/CN.4/Sub.2/1995/17.

Namibia

[Original: inglés]
[5 de abril de 1995]

Observación general

1. Estamos de acuerdo en general con las disposiciones, en particular porque el pago de reparaciones demuestra de manera inequívoca que los autores de violaciones manifiestas de los derechos humanos no quedan impunes y se paga una indemnización adecuada a las víctimas.

Punto 7

2. No nos parece justificado que los Estados deban proporcionar reparación a las víctimas. Esta disposición sólo puede justificarse si el Estado es el causante de la infracción, a través de sus funcionarios u órganos. Si la violación es cometida por individuos a título personal, el Estado estará obligado únicamente a facilitar los procedimientos adecuados para que las víctimas puedan reclamar y recibir reparación de los autores, por ejemplo asistencia jurídica a cargo del Estado para ayudar y representar a las víctimas indigentes para que puedan obtener reparación.

Punto 18

3. A falta de otras pruebas, las reparaciones deberían basarse también en los testimonios confirmativos de los familiares, médicos y otros profesionales del sector de la salud e investigadores fidedignos que hayan emprendido estudios sobre las violaciones merecedores de confianza.

Perú

[Original: español]
[19 de mayo de 1995]

1. El Estado peruano podría hacer suyas las apreciaciones presentadas en el proyecto bajo comentario, en el sentido de que la violación de los derechos humanos debería otorgar a la víctima una resarción justa y digna, siempre y cuando se comprobase la veracidad del hecho denunciado y la responsabilidad del autor.

2. Debemos ser conscientes de que existen daños que resultan irreparables, como la pérdida de vidas humanas, la privación de la libertad, el daño a una parte del cuerpo, los daños mentales ocasionados por las agresiones sexuales, o en general, el desmedro de la salud; sin embargo, la posibilidad de reconocer medios adecuados que permitan en alguna medida resarcir los daños ocasionados por violaciones de los derechos humanos, por errores judiciales o por abusos de poder, son indispensables en un Estado de derecho como el nuestro.

3. Consideramos de suma importancia la inclusión, dentro de nuestra legislación, de instituciones como la reparación, la indemnización, así como la eliminación del acto atentatorio de los derechos humanos, en la medida que con ellos se alivia el sufrimiento de las víctimas que han padecido este abuso y en el mejor de los casos, la eliminación del hecho y el regreso a la situación anterior al acto atentatorio.

4. De acuerdo a lo indicado en el proyecto de principios y directrices básicos, el Estado peruano reconoce el deber que tiene todo Estado de conceder la reparación en caso del quebrantamiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Es así que el ordenamiento jurídico nacional ha previsto la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos desde su Carta Fundamental.

5. La Constitución política considera, en primer lugar, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es así que, de acuerdo a lo establecido en el proyecto de directrices y principios básicos, el Estado peruano reconoce, en consecuencia, los siguientes derechos de la persona: a la vida, a su identidad e integridad (art. 2.1); a la igualdad ante la ley (art. 2.2); a la libertad de conciencia y religión (art. 2.3); a la libertad de información (art. 2.4); al honor y a la intimidad (art. 2.7); a la libertad de creación (art. 2.8); a la inviolabilidad del domicilio (art. 2.9); al secreto e inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados (art. 2.10); a la libertad de tránsito (art. 2.11); a la libertad de reunión (art. 2.12); a la libertad de asociación (art. 2.13); a la libertad de contratación (art. 2.14); a la libertad de trabajo (art. 2.15); a la propiedad y a la herencia (art. 2.16); a la participación ciudadana (art. 2.17); a mantener reserva sobre sus convicciones (art. 2.18); a su identidad étnica y cultural (art. 2.19); a formular peticiones (art. 2.20); a su nacionalidad (art. 2.21); a la libertad y seguridad personales (art. 2.24); a la protección de su salud (art. 7); a la educación (art. 13); a la sindicación, negociación colectiva y huelga, así como a la protección contra el despido arbitrario (arts. 27 y 28)

6. Con estas precisiones, el legislador hace suyo el reconocimiento por la búsqueda de un ideal de justicia y de bien social, acorde con las tendencias actuales de un Estado social de derecho, respetuoso de los derechos de sus ciudadanos y que incluso son anteriores y superiores al Estado; es decir, que los derechos no son dados a las personas por la Constitución sino que existen antes que ella y que el propio Estado.

7. Siendo este conjunto de conceptos un buen elemento para sustentar una reparación ante las violaciones de los derechos humanos, en la medida que éstos no son considerados como una consecuencia de la promulgación de una constitución o del establecimiento de un ordenamiento jurídico, sino que son inherentes a las personas, nacen junto con ellas independientemente del tipo de sociedad en el cual les toque vivir.

8. En tal medida, nuestro Gobierno ha tomado especial atención a los aspectos que guardan relación con la obligación del Estado de respetar y velar por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción.

9. Para que lo consagrado en los primeros artículos de nuestra Constitución no se quede en simples afirmaciones de buenas intenciones, sino que por el contrario alcancen una adecuada realización en los hechos de la vida social del país, se han introducido a lo largo de nuestra Constitución una serie de procesos y mecanismos que conllevan a un adecuado reconocimiento y realización de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, esto es, la reparación.

10. En tal sentido, el artículo 139 de nuestra Constitución vigente establece que son los principios de la función jurisdiccional, entre otros, la indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio a la responsabilidad a que hubiere lugar.

11. Es así que, reconociendo el poder que se ha conferido a las autoridades policiales, militares y judiciales, ante hechos de nuestra realidad politicosocial, como son el terrorismo y el narcotráfico, dota por otro lado a los ciudadanos de la posibilidad de alcanzar una indemnización por aquellos errores perpetrados en contra de su libertad individual y por aquellos errores cometidos contra la identidad de las personas, sobre todo en procesos que buscan identificar y reprimir a autores de delitos de terrorismo y narcotráfico, los cuales, por la gravedad que implican, gozan de procedimientos especiales.

12. En tal orden de ideas, y ante tales posibilidades atentatorias contra la libertad individual de las personas, existen una serie de normas que, de acuerdo a lo establecido en el proyecto de principios y directrices básicos propuesto, se orientan a dar una rápida y justa solución a estas violaciones.

13. Es así que el Decreto legislativo N° 768, del 4 de marzo de 1992 establece que será competente para conocer la pretensión de indemnización por detención arbitraria, el juez civil del lugar donde se produjo la detención o donde tenga su domicilio el afectado, a elección de éste. De igual manera, consagra que el procedimiento a seguir para este caso de violaciones es el proceso abreviado el cual, como su nombre indica, es un tipo de procedimiento que busca una rápida solución a la pretensión solicitada. Tal es así que reúne en sus etapas la posibilidad de presentarse en una audiencia en la cual se sustenten las pruebas de los hechos que demuestren la veracidad del daño producido; de igual manera. contempla la posibilidad de presentarse en una etapa previa a la anteriormente mencionada, en la cual las partes en conflicto concilien sus posiciones, y se busque una solución equitativa para ambos.

14. Es así que se adopta este proceso, a fin de velar por que el derecho a la reparación esté al alcance de todos, tratando de evitar dificultades

excesivas y habida cuenta de la posible vulnerabilidad de las víctimas. En tal sentido, se incluye dentro de la legislación nacional sobre la materia uno de los principios propuestos en el proyecto bajo comentario.

15. Sin embargo, no sólo nuestra Carta Fundamental establece mecanismos para lograr una adecuada protección de los derechos humanos. La legislación procesal penal vigente autoriza a cualquier ciudadano, en los delitos de acción pública, a denunciar ante el Ministerio Público toda infracción penal que lesione los derechos fundamentales (artículo 76 del Código de Procedimiento Penal). De igual manera, el artículo 11 de la Ley orgánica del Ministerio Público menciona que el fiscal es el titular de la acción penal pública y la ejercita de oficio o a instancia de parte agraviada o por acción popular. Los ciudadanos pueden interponer la denuncia ante el fiscal provincial o ante el fiscal superior, el que está obligado, de ser procedente, a iniciar la investigación preliminar correspondiente y promover el ejercicio de la acción penal ante el poder judicial.

16. El nuevo sistema procesal penal incorpora el modelo acusatorio moderno en el enjuiciamiento de los delitos. Concede al Ministerio Público un rol protagónico en la investigación del delito, fortalece el derecho de defensa y las garantías del justiciable, e instaura una judicatura que tiene como eje de su función controlar al fiscal, dictar medidas coercitivas y dirigir la etapa del juzgamiento. Los delitos comunes son de competencia de la justicia ordinaria. Los delitos de función lo son del fuero militar, siempre y cuando se trate de conductas directamente vinculadas con las funciones militares o policiales y en la medida que afecten bienes jurídicos exclusivamente castrenses y el orden disciplinario de las fuerzas armadas o policía nacional (artículo 14 del nuevo Código de Procedimiento Penal).

17. Por otro lado, el artículo 509 de nuestro Código Procesal Civil establece la responsabilidad civil de los jueces, cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causen daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable: este reconocimiento de la responsabilidad civil de los jueces no los exime de ninguna manera de la responsabilidad administrativa o penal, a la cual pueden hacerse merecedores de comprobarse una conducta en contra de los principios jurisdiccionales vigentes.

18. En tal sentido, se considerará una conducta dolosa del magistrado, en caso que incurra en falsedad o fraude, o si deniega justicia al rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia ajena.

19. Por otro lado, se considera que incurrirá en culpa inexcusable cuando nos encontremos en el caso que el juez cometa un grave error de derecho o incurriera en una interpretación insustentable de la ley, o si es que causa una indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado.

20. Sin embargo, la norma va más allá y establece una serie de presunciones para determinar el dolo o culpa inexcusable por parte de los magistrados. Es así que existirá tal presunción cuando la resolución contraría su propio criterio sustentado anteriormente en causa similar, salvo que motive los fundamentos del cambio o cuando resuelve en discrepancia con la opinión del

Ministerio Público o en discordia, según sea el caso, en temas sobre los que existe jurisprudencia obligatoria o uniforme o en base a fundamentos insostenibles.

21. De esta manera, se busca otorgar a las personas una serie de criterios que puedan ser considerados uniformes para que gocen de una adecuada protección en caso de algún perjuicio.

22. La norma glosada también establece que la obligación de pago de los daños y perjuicios es solidaria entre el Estado y el juez o jueces colegiados que expidieron la resolución causante del agravio.

23. En el ámbito del derecho civil, nuestro ordenamiento jurídico sustantivo establece en los artículos 1969 y siguientes que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. De igual manera, el mismo cuerpo normativo establece que, aquel que tenga a otro bajo sus órdenes, responderá por el daño causado por este último, si el daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. En ese caso, tanto el autor directo como el autor indirecto, estarían sujetos a responsabilidad solidaria.

24. De igual manera, nuestro Código Civil consagra la existencia del daño moral, de tal manera que deberá ser indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. La indemnización comprenderá tanto las consecuencias que se deriven de la acción u omisión generadora del daño a la persona y al daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido.

25. Es así que nuestro Código también incluye algunos de los principios contenidos en el proyecto propuesto que de acuerdo a lo indicado el daño moral consagrado en el artículo 1984 incluye daños mentales, a la reputación y dignidad, la pérdida de oportunidades, etc.

26. En tal sentido, la institución de la responsabilidad extracontractual consagrada en nuestro Código Civil de 1984 es perfectamente aplicable para una consiguiente búsqueda de una reparación justa ante la violación de cualquier derecho y, sobre todo, de los derechos fundamentales, los cuales, de acuerdo a lo manifestado con anterioridad, están consagrados constitucionalmente.

27. Es de interés indicar que también el Decreto supremo N° 17-93-JUS, del 2 de junio de 1993, establece que los miembros del poder judicial son responsables civilmente por los daños y perjuicios que causan con arreglo a las leyes de la materia, de igual manera son responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, estableciendo que los miembros del poder judicial son responsables, disciplinariamente, por las irregularidades que cometan en el ejercicio de sus funciones. Las quejas e investigaciones de carácter disciplinario formuladas contra los magistrados serán tramitadas y resueltas por el poder judicial.

28. Es así que determina que, entre otras causas, son considerados actos de responsabilidad disciplinaria el abuso de facultades que sean señaladas por la ley respecto de sus subalternos, o las personas que intervienen de cualquier manera en un proceso por infracción a los deberes y prohibiciones establecidos por la ley, por no ejercitar control permanente sobre sus auxiliares y subalternos y por no imponer las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique.

29. Las sanciones contra los magistrados que incurran en estos actos serán aplicadas por los siguientes órganos:

- a) la Sala Plena de la Corte Suprema;
- b) el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;
- c) la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial; y
- d) la Oficina Distrital de Control de la Magistratura del Poder Judicial, donde hubiere.

30. Dentro de este marco de protección legislativa que busca reparar los errores cometidos en el campo de la administración de justicia, se promulgó la Ley N° 24973 del 28 de diciembre de 1988, Ley que regula la indemnización por errores judiciales y por detenciones arbitrarias.

31. En tal sentido, la norma bajo comentario establece que tendrán derecho a indemnización por detención arbitraria quienes son privados de su libertad por la autoridad policial o administrativa, sin causa justificada o, existiendo ésta, si se excede de los límites fijados por la Constitución o por la sentencia. También tiene derecho a indemnización aquel que sea puesto oportunamente a disposición del juez competente dentro del término establecido por la Constitución.

32. Por otro lado, tendrán derecho a indemnización por error judicial quienes luego de ser condenados en un proceso judicial hayan obtenido un juicio de revisión, resolución de la Corte Suprema que declara la sentencia errónea o arbitraria; de igual manera, los que hayan sido sometidos a proceso judicial y privados de su libertad como consecuencia de éste y obtenido posteriormente acto de archivamiento definitivo o sentencia absolutoria.

33. En esta norma, se contempla otro de los principios establecidos en el proyecto analizado, el cual es la proporcionalidad de la indemnización, ya que el artículo 4 de la Ley N° 24973 establece que la indemnización por detención arbitraria será fijada en proporción directa al tiempo de la detención y a la renta de la víctima, acreditada fehacientemente. De igual manera se reconoce que la indemnización deberá estar en proporción con los daños resultantes de las violaciones de los derechos humanos que puedan evaluarse económicamente, en atención al daño material o al daño moral causado a la víctima.

34. El Gobierno peruano considera de fundamental importancia para lograr una adecuada protección de los derechos humanos, así como para poder dar una solución rápida a los mismos, el contar con una estructura estatal que consagre el sistema democrático y representativo, siguiendo su permanente tradición.

35. En este orden de ideas cuenta con un poder público, en correspondencia con su naturaleza democrática, el cual emana del pueblo. El artículo 45 constitucional precisa que el ejercicio de la autoridad se desarrolla dentro de los límites y con las responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.

36. En realidad, poco podríamos hablar de una protección de los derechos humanos y de una consiguiente reparación por la violación de los mismos, si no contáramos con un sistema de administración de justicia sustentado en los principios de independencia y de observancia del debido proceso, así como la tutela jurisdiccional efectiva, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar el imperio de la ley y el respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Una garantía central, amén del principio de juez independiente, objetivo e imparcial (artículo 146 de la Constitución), es que los jueces deben de hacer prevalecer la Constitución sobre toda norma legal que la infrinja, así como el principio de jerarquía normativa (artículo 51 de la Constitución).

37. El poder legislativo, además de sancionar, interpretar, modificar o derogar las leyes y resoluciones legislativas, tiene como atribución central velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores (artículo 102 de la Constitución). En este orden de ideas, la Constitución de 1993 ha creado la Defensoría del Pueblo; en cuanto órgano autónomo que informa anualmente al Congreso de la República de sus actividades, es el encargado de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía (artículos 161 y 162 de la Constitución).

38. Asimismo, en el seno de la Cámara, según el reglamento del Congreso, existe la Comisión de Derechos Humanos, encargada de proteger, garantizar e investigar las violaciones a los derechos humanos, Comisión que constituye una pieza central del sistema general de protección de los derechos humanos en el país.

39. El poder ejecutivo ha procedido a incorporar a nivel institucional organismos encargados de promover y defender los derechos humanos. Destaca, como órgano de línea del Ministerio de Justicia, al Consejo Nacional de Derechos Humanos (artículo 7, Decreto legislativo N° 25993), encargado de promover, coordinar, difundir y asesorar para la tutela y vigencia de los derechos fundamentales de la persona (artículo 127, R.M. N° 076-93-JUS). El citado Consejo, según su reglamento interno, está integrado por representantes de diferentes sectores del Estado y la sociedad civil (D.S. N° 038-93-JUS).

40. Por lo demás, en cada ministerio e instituto de las fuerzas armadas y policía nacional existen departamentos de derechos humanos, encargados de velar por el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas. El Estado reconoce y respeta el aporte de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Estas son numerosas y actúan en todos los ámbitos vinculados a la protección y promoción de los derechos humanos. Destaca la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que centraliza y representa al conjunto de organizaciones no gubernamentales.

41. De conformidad con lo establecido en el proyecto de principios y directrices básicos propuesto, el Título V de nuestra Constitución, denominado "De las garantías constitucionales", consagra seis garantías constitucionales o instrumentos procesales destinados a la defensa de los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución (artículo 200 de la Constitución), de tal manera que se cumpliría con el objetivo de contar con mecanismos procesales adecuados para que la víctima obtenga el derecho a la reparación.

42. En tal sentido, los mecanismos procesales establecidos por la Constitución son:

La acción de hábeas corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos;

La acción de amparo que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Esto último es obvio porque contra las primeras existen acciones constitucionales específicas que a continuación se indicarán y contra las segundas los correspondientes recursos impugnatorios.

La acción de hábeas data que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5), 6) y 7) de la Constitución política. Los indicados incisos garantizan, respectivamente, la libertad de información; que los servicios informáticos no suministren información lesiva al derecho a la intimidad; y el derecho al honor y a la buena reputación.

La acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo, tales como leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del congreso, normas regionales de carácter regional y ordenanzas municipales.

La acción popular que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualesquiera sea la autoridad de la que emanen.

La acción de cumplimiento que procede, contra cualquier autoridad o funcionario renuente, a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

43. La Constitución establece que una ley orgánica regulará el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. La acción de inconstitucionalidad es resuelta en instancia única por el Tribunal Constitucional. Las demás acciones se interponen ante el poder judicial y solamente pueden llegar al Tribunal Constitucional si los jueces la desestiman, salvo el caso de la acción popular, cuyo conocimiento está vedado al Tribunal Constitucional.

44. Es importante resaltar el ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción. Y si se interponen en relación a derechos suspendidos o restringidos, el órgano jurisdiccional debe examinar la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo (artículo 200 de la Constitución).

45. Nuestro ordenamiento jurídico consagra la protección integral de los derechos humanos. Se otorga una doble protección, tanto de orden interno cuanto internacional, en la medida en que el Perú ha ratificado casi la totalidad de los instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos y se halla sometido a la supervisión de los distintos órganos de control, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

46. El capítulo XI del título IV de la Constitución ha creado la Defensoría del Pueblo, como institución autónoma y de estructura nacional. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas y su cargo dura cinco años, el mismo que no está sujeto a mandato imperativo (art. 161).

47. Como ya se dijo, la Defensoría del Pueblo defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Presenta un informe anual al Congreso, tiene iniciativa legislativa y puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. Esta institución, que anteriormente estaba incorporada al Ministerio Público, Fiscalía de la nación, representa un indudable avance en materia de protección de los derechos humanos y demuestra la vocación del Perú de hacerlos respetar.

48. La declaratoria del estado de excepción no suspende el ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo; y, tratándose de los derechos restringidos o suspendidos, el juez debe examinar la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo (artículo 200 de la Constitución). De igual manera, el artículo 8 de la Ley orgánica del Ministerio Público estatuye que la declaración del estado de excepción no interrumpirá la actividad del Ministerio Público, ni el derecho de los ciudadanos de recurrir o acceder a él personalmente.

49. La detención preventiva policial, por un término no mayor de 15 días, tiene consagración constitucional. No obstante ello, los detenidos no son víctimas de indefensión, desde que el rol del Ministerio Público no fue cancelado por la legislación antiterrorista. El fiscal no sólo visita los centros de detención y provee de defensa a los detenidos, sino que cuida que la investigación policial no exceda los límites que le impone la ley. Toda detención es puesta en conocimiento del Ministerio Público y del juez, y es a partir de este momento que los fiscales llevan a cabo sus labores de control y supervigilancia. La Constitución prohíbe la tortura y además reconoce el derecho de los detenidos de requerir un inmediato examen médico. Por consiguiente, pese a las mayores atribuciones policiales, el ordenamiento jurídico peruano reconoce las potestades del Ministerio Público de garantizar los derechos del ciudadano y a éste de exigir exámenes médicos para establecer o descartar la existencia de tratos indebidos.

50. Los derechos humanos son materia de discusión continuamente y el Estado peruano hace importantes esfuerzos por mantener su legislación al día en esta materia, al igual que en otras áreas indispensables para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En tal sentido, se protege a las víctimas, familiares y amigos de aquellos que han sufrido un perjuicio en la esfera interna de sus derechos fundamentales.

51. Muchos países, ya sean desarrollados o subdesarrollados, se ven expuestos a casos de violación de los derechos humanos en diferentes formas y niveles. La prevención de hechos violatorios de los derechos humanos debe estar dirigida a crear instituciones que se concentren en las zonas de emergencia y que constantemente se realicen investigaciones profundas sobre las denuncias de comportamiento indebido de diversas autoridades.

52. De acuerdo a lo expresado en el presente informe, el Perú viene implementando importantes medidas para lograr alcanzar una adecuada protección de los derechos humanos en nuestro país. Es así que ya ha hecho suyas muchas de las medidas incluidas en el proyecto de principios y directrices básicos que se nos han presentado; sin embargo, debido a las características de la realidad que el Perú ha vivido en los últimos años, debemos mencionar que el camino por recorrer para llegar al equilibrio deseado por todos aún es largo.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

[Original: francés/inglés]
[15 de mayo de 1995]

1. El informe definitivo presentado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y las libertades fundamentales, marcará con toda probabilidad un hito

en el combate ya secular para la promoción y la protección de los derechos humanos, sobre todo si las conclusiones y recomendaciones de su estudio pudiesen ser objeto de algún instrumento internacional.

2. La acción de la UNESCO en esta materia puede interesar al Relator Especial al menos en los dos puntos siguientes:

por una parte: la decisión 104 EX/3.3 del Consejo Ejecutivo (París, 24 de abril-9 de junio de 1978);

por otra parte: la cuestión de la responsabilidad internacional del Estado en caso de racismo.

1. Decisión 104 EX/3.3: Estudio de los procedimientos que convendría seguir para el examen de los casos y los asuntos que puedan someterse a la UNESCO en lo que respecta al ejercicio de los derechos humanos en las esferas de su competencia, a fin de dar más eficacia a su acción: Informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo

3. Estos procedimientos podrían inscribirse en el estudio del Relator Especial en la medida en que las comunicaciones dirigidas a la UNESCO se refieren a:

por una parte, casos relativos a violaciones de derechos humanos que tienen un carácter individual y específico;

por otra parte, cuestiones relativas a violaciones en gran escala, sistemáticas o manifiestas de los derechos humanos que son consecuencia, sea de una política contraria a los derechos humanos practicada de derecho o de hecho por un Estado, sea de una acumulación de casos individuales que constituye un conjunto concordante.

4. Las comunicaciones sobre casos se examinan en principio en sesión privada; las comunicaciones sobre cuestiones se examinan por el Consejo Ejecutivo y por la Conferencia General en sesión pública.

5. El Comité de Convenios y Recomendaciones del Consejo Ejecutivo, órgano principal para el examen de las comunicaciones, se pronuncia ante todo sobre la admisibilidad de las comunicaciones en sesión privada. Hay diez condiciones de admisibilidad; si no se cumple una de ellas, no se da curso a la comunicación. Estas condiciones se enumeran en el inciso a) del párrafo 14 de la decisión. Incumbe a los autores de las comunicaciones probar que se cumplen estas condiciones.

6. Sería pues oportuno transmitir al Relator Especial los documentos adjuntos siguientes del Consejo Ejecutivo:

la decisión 104 EX/3.3;

el estudio 146 EX/7 de 24 de febrero de 1995, titulado "Cuestiones relativas a los métodos de trabajo del Comité de Convenios y Recomendaciones".

2. Problema de la responsabilidad internacional del Estado en caso de racismo

7. Sería igualmente oportuno comunicarle, a nuestro parecer, el texto adjunto de la Declaración de la UNESCO sobre la raza y los prejuicios raciales, aprobada por la Conferencia General en su 20ª reunión, París, el 27 de noviembre de 1978, en la medida en que este instrumento establece el principio de la responsabilidad internacional de los Estados respecto a toda forma de discriminación racial; así lo declara el párrafo 1 del artículo 9:

"El principio de la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos y de todos los pueblos, cualquiera que sea su raza, su color y su origen, es un principio generalmente aceptado y reconocido por el derecho internacional. En consecuencia, toda discriminación racial practicada por el Estado constituye una violación del derecho internacional que entraña su responsabilidad internacional."

Comité Internacional de la Cruz Roja

[Original: inglés]
[20 de abril de 1995]

1. Quisiéramos ante todo expresar nuestra admiración por la calidad del estudio realizado por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial, sobre un tema tan amplio y complejo. El CICR ha examinado minuciosamente el estudio, máxime por cuanto, desde el principio, ha seguido los progresos del trabajo relativo a un derecho a indemnización. Lo ha hecho así tanto en el marco del propio Subcomité como en el seminario organizado sobre el tema en Maastricht, Países Bajos, en 1992. Como el Sr. van Boven indica en la introducción de su estudio, ese seminario contribuyó considerablemente a la redacción del proyecto de principios y directrices básicos que constituyen el capítulo IX del estudio.

2. El CICR observa con satisfacción que en el estudio del Sr. van Boven se mencionan también las reglas principales del derecho internacional humanitario sobre la obligación de proporcionar una indemnización por las violaciones de ese derecho. Nos permitimos proponer que se incluya la siguiente frase en la primera sección (Principios Generales) del proyecto de principios y directrices básicos: "En situaciones de conflicto armado, los actos que violen el derecho internacional humanitario requerirán reparación de conformidad con las disposiciones pertinentes de ese derecho".

3. En conjunto, el proyecto de principios y directrices básicos constituye una buena base para el reconocimiento del derecho de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Es importante que se divulguen con la

mayor amplitud posible -en particular en las situaciones de conflicto armado interno u otras violencias internas- tan pronto como quede aprobado el texto definitivo.

4. Es también importante señalar que la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, celebrada en Ginebra en 1993, reafirmó en su Declaración Final el principio de la indemnización como reconocido por el derecho internacional humanitario. El párrafo 7 de la parte II estipula que "los Estados que violen el derecho internacional humanitario estarán obligados a indemnizar, si ha lugar".

5. A tenor de los Principios Generales (Nº 2: Responsabilidad y medidas contra la impunidad), la Declaración citada afirmaba en el mismo párrafo que todos los Estados están obligados a perseguir los crímenes de guerra para que "no queden impunes" y a "aplicar las disposiciones en las que se prevén sanciones en caso de infracción grave contra el derecho internacional humanitario".

6. El principio de indemnización previsto en el derecho internacional humanitario debe aplicarse con equidad y sin discriminación, como todas las obligaciones humanitarias. Por consiguiente, cualquiera que sea el partido al que pertenezcan los actores de las violaciones, debe concederse a cualquier víctima que tenga derecho a ello una indemnización proporcionada al daño causado. El proyecto de principios y directrices básicos adopta un enfoque análogo.
